
Revista
Insurreción
Edición No.399
Noviembre/18/2013

# SUMARIO








El Sistema de Salud en Colombia, siempre estuvo en cuidados intensivos, pero fue asesinado en 1993, con la Ley 100, cuyo ponente fue el nefasto Álvaro Uribe. Mediante esa ley, la salud dejó de ser un derecho de la población, que debía ser garantizado por el Estado y se convirtió en un lucrativo negocio, que le regalaron, principalmente, a las empresas multinacionales y a los testaferros del narco paramilitarismo.

Cuando la salud no es un derecho sino un servicio, se vuelve una mercancía, eso significa que sólo pueden acceder a ella, los que tengan la suficiente capacidad adquisitiva, estratificando la calidad, de acuerdo a lo que cada paciente pueda pagar, y, se condena a la población pobre a padecer las enfermedades curables y a la muerte por desatención.

Los recursos del Estado destinados a la salud, se reducen a un mínimo, de acuerdo a la regla de la sostenibilidad fiscal, que prioriza el pago de la deuda externa y los gastos de guerra, mientras se va eliminando el gasto social. Esos recursos se entregan a las Empresas Prestadoras de Servicios -EPS-, correspondientes a los Regímenes Subsidiados y Contributivos, pero esos traficantes de la muerte, se inventan todo tipo de artimañas, para quedarse con el dinero sin brindar el servicio, burlando el Plan Obligatorio de Salud -POS- y sometiendo a los pacientes al famoso "paseo de la muerte".



Las EPS le cobran al estado por medicamentos que nunca entregan y con sobrefacturaciones de hasta un 500 por ciento. Una buena porción de los pacientes son remitidos a los hospitales y clínicas, a quienes no les cancelan los servicios, acumulando actualmente una deuda de 3,8 billones de pesos, que obliga al cierre de los pocos hospitales públicos que aún se mantienen, gracias al sacrificio de sus trabajadores.

## Cosméticos A la calavera

Ahora el presidente Juan Manuel Santos, le presenta al Congreso su reforma a la salud, mediante el proyecto de Ley Ordinaria 210 del 2013, que ya fue aprobado en los dos debates del Senado y pasa a los dos debates en la Cámara, exigiendo a la bancada de la Unidad Nacional, que sea aprobada antes del 16 de diciembre, cuando termina el periodo legislativo de este año.

Como fiel sirviente del neoliberalismo y presionado por los acuerdos de los TLC, el proyecto Santista




de salud profundiza la privatización, donde prima la rentabilidad económica sobre el beneficio social, discrimina a los pacientes de acuerdo a su clase social, dejando a los pobres, marginados de la salud asistencial y preventiva.

Santos intenta engañar con cambios cosméticos o con simples cambios de nombre. Por ejemplo, ha dicho que acaba con las desprestigiadas EPS, pero crea los Gestores de Servicios de Salud, que cumplen el mismo papel de intermediarios y especuladores financieros, pues seguirán manejando los dineros estatales, minimizando el servicio para maximizar sus ganancias y pueden desarrollar el monopolio vertical, hasta el cubrimiento de la Atención Primaria de Salud, que les permite evitar el acceso de los pacientes que les sean muy costosos.

Después de despilfarrar 45 billones de pesos anuales, las EPS se declaran en quiebra y el gobierno aprovecha para trasladar ese gran déficit a la salud pública, para negarle los presupuestos y acabarla de enterrar; mientras premia a las EPS, cambiándoles de nombre y otorgándoles mayores ventajas. Como dice el dicho popular "borrón y cuenta nueva". Es evidente que la reforma Santista está dictada por las mafias de la salud, para seguirse enriqueciendo a costa de la salud y la muerte de los humildes.

A los profesionales, técnicos y demás trabajadores de la salud privada, se les sobre-explota con extenuantes jornadas, con desmejoras salariales y se les obliga a pisotear su ética, al evitar la atención de enfermedades costosas, exigiendo determinada cantidad de pacientes por hora y




al administrar los placebos, que permiten unas recetas mínimas y no los medicamentos para curar a los enfermos.

A los trabajadores de la salud pública se les han cercenado sus prestaciones laborales, no se les brinda ni las condiciones ni el instrumental necesario y ni siquiera se les cancelan sus sueldos por largos periodos de tiempo, convirtiéndose en verdaderos héroes sociales, al mantener abiertos los hospitales y la atención al público sin recibir sueldos por más de un año.

## El tsunami blanco

El proyecto de Ley 210 del gobierno de Santos, ha obligado a las manifestaciones de los trabajadores y estudiantes de la salud en las principales ciudades colombianas, generando conciencia ciudadana. Las marchas de las batas blancas, se han ido acrecentando y ya se sienten como una fuerte marea que inunda las calles de todo el país y golpea hasta las puertas del palacio presidencial.

También se ha reactivado la Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud -ANSA-, que agrupa más de 50 organizaciones sindicales y sociales, de la medicina, la enfermería, trabajadores de la salud, la academia, de usuarios; quienes en el 2011, de forma participativa elaboraron una propuesta legislativa para mejorar el sistema de salud, pero que no ha sido tenida en cuenta. Ahora han presentado un Pliego Unificado de 22 puntos, que también ha sido ignorado.

El gobierno sigue sordo, ciego y mudo, frente a los clamores populares. Ya es hora que retire ese proyecto antisocial y se disponga a permitir las consultas populares, donde se fomente el debate y se recoja los sentires de las colombianas y colombianos, que venimos siendo víctimas, de este sistema inequitativo y criminal.

La única manera de revivir la salud colombiana, es que el Estado garantice la salud como un Derecho Fundamental, mediante el ofrecimiento de un Sistema Público de Salud, de eficiente cubrimiento al conjunto de la población.

Las mafias de la salud deben ser juzgadas por genocidio y crímenes de Lesa Humanidad; además, se les debe decomisar todas sus propiedades y cuentas bancarias, para que repongan en parte, los dineros que le han robado a la pobrería.

Si el gobierno de Santos, pretende imponer su reforma neoliberal a pupitrazo legislativo, mediante los consabidos sobornos a los parlamentarios, con toda seguridad que la creciente marea blanca se terminará convirtiendo en un tsunami social.




# Los Consensos de la Habana y los Retos del País

Es indiscutible que la firma del segundo acuerdo en la Habana sobre participación política, alcanzado entre el gobierno nacional y las FARC, es un buen indicativo de los avances que se van logrando y contribuye, sin dudas, a derrotar a quienes empujan a diario el carro de la guerra. Es un acuerdo que ha sido bien recibido, por la porción del país que ha soñado con una solución política justa a los profundos problemas de Colombia.

Metiéndole un poco de mente a la letra menuda del acuerdo hay aspectos que nos deben llamar a una profunda reflexión. Martha Ruiz en la revista Semana del 10 de noviembre, pregunta por qué hubo necesidad de que hubieran 200 mil muertos, para hasta ahora proponerse unos cambios democráticos.

Tremendo desangre a que ha sido sometido el país, para decirnos que ahora es posible una apertura democrática, nos habla de la mentalidad mezquina y antidemocrática de una clase dirigente que le teme al huracán de las mayorías populares y nacionales construyendo patria, constituyéndose en sujeto de acción para los cambios.

¿Por qué hasta ahora se propone que se va a elaborar un estatuto de la oposición?

Algunos pretenden culpar a la guerrilla de esa ausencia, porque según ellos la existencia de la insurgencia impide que en Colombia se transite por la democracia. Esta teoría es parecida a aquella que culpabiliza a los pobres de la pobreza, criminalizándolos y condenándolos a la muerte mediante las políticas de limpieza social y de eutanasia social cotidiana. Con este argumento, en juicio nuestro, se pretende legitimar la guerra, que la clase privilegiada han desarrollado hacia al pueblo cuando se moviliza en demandas de sus derechos, como sucedió en el reciente paro nacional agrario.

La minoría gobernante al no reconocer ni darle estatus de oposición a los que disienten de las políticas oficiales, demuestra ausencia de voluntad política para abrir las puertas de la participación a otros sujetos distintos a ellos, con todas las garantías. Por ello ha negado, por años y décadas, el derecho a ser oposición a los partidos, movimientos, fuerzas sociales y políticas distintas a los partidos tradicionales; y por ello, lo más absurdo todavía, se ha acudido al expediente del genocidio para evitar su ascenso al gobierno. Allí están los testimonios históricos de la barbarie contra la UP, A Luchar, el Frente Popular, y los miles de asesinatos de líderes del movimiento social.

Con este acuerdo el gobierno reconoce que Colombia no es "la democracia más antigua del continente", como se vende en los discursos al exterior y a los colombianos, y que por el contrario, es un remedo de democracia restringida para las elites, silenciada para los que




no somos parte de ellas, que somos la inmensa mayoría de la población.

## Una sociedad y una democracia del tamaño de la nación

Orlando Fals Borda y Manuel Zapata Olivella son los pioneros de la búsqueda de un proyecto nacional, este afirmó que:

"Necesitamos que la sociedad de manera efectiva y contundente sea una casa para todos y en donde el ejercicio de la ciudadanía trascienda la estereotipada visión de lo cívico acuñada en el siglo XIX y se ejerza desde las distintas racionalidades culturales que integran la ciudad, la región y la nación".

El acuerdo sobre participación política dice que se establecerá una circunscripción especial para que las regiones o zonas de conflicto participen en el Congreso de la República. Este es el reconocimiento de parte del Estado de la existencia de vastos territorios de Colombia, que han estado ausentes de la vida política, de actuar en la democracia, de ser sujetos que inciden en el destino del país. Reconocen que el cuerpo social y político ha ido creciendo, mientras la camisa institucional se quedó pequeña.

Somos un país que ha crecido en todos los sentidos, tanto sociales, culturales y políticamente. No es posible mantener el mismo sistema político ni el grosor de las instituciones, ni las mismas pedagogías de participación y representación, mucho menos mantener una democracia de apariencias y destartalada.

Somos un país pluricultural y plurisocial como lo registra la raída Constitución del 91, caída en desgracia por los 33 borrones y tachones que le han hecho a favor de las elites dominantes. La democracia tiene que incluir estos y otros componentes de la nacionalidad.

El desactualizado Censo de 2005 dice que la población negra es de 4 millones, algo más del 10 por ciento de los habitantes, pero solo tienen dos escaños en la Cámara de representantes de un total de 116. Este censo dice que la nación indígena son 1 millón 400 mil personas, pero en el Senado de la República no sobrepasan el 2 por ciento de los escaños. En cambio, los propios movimientos afro e indígena afirman que son 10 y 3 millones respectivamente.

Los componentes poblacionales de la geografía social y cultural de Colombia, ha sido invisibilizada y desconocida en su papel de ser constructora de nación. Igual exclusión sufren en las instituciones de debate y legislación las mujeres, los campesinos, los trabajadores.

Tenemos el reto de imaginarnos una democracia que no sea el rito de la formalidad electoral, pues no solo ha habido una configuración social y étnica distinta en el país, también han surgido ideas y escenarios distintos al establecimiento y los dogmas neoliberales, lo cual va expresando y clama la urgencia





de otros consensos, de otros marcos institucionales y otras metodologías. Esto es uno de los tantos otros retos.

Hay procesos sociales que van rompiendo la invisibilidad y creciendo en la conciencia de sus derechos y de la pertenencia a un país al cual han contribuido decisivamente a forjar pero que han sido negados, como nación, como pueblo y como ciudadanos por pertenecer a un sujeto, a una etnia, a una comunidad que ama el territorio y a su patria. Esto es lo que expresan las luchas, los escenarios, las emergencias de una nueva ciudadanía a la que asistimos con la creciente resistencia, los alzamientos populares y los estallidos sociales que recorren las venas y arterias de Colombia, y que no se ha planteado ser oposición sino propone alternativas.

Los acuerdos de La Habana sobre participación política son un logro de la insurgencia, del movimiento social, de los amantes de la democracia, de los que queremos paz, de los demócratas y de toda una ciudadanía activa, así debemos percibirlos y defenderlos. Los acuerdos logrados son limitados, bastantes estrechos, porque ha habido mucha oposición del gobierno para hacerlos más profundos.

La fortaleza de una democracia reside en la existencia de un poderoso y fluido tejido social, que ha sido desbaratado y debe reconstruirse, como piedra angular de la participación política.






## El fracaso de los TLC'S

El gobierno actual impuso de manera intolerante y excluyente, sin escuchar y analizar de manera consensuada las repercusiones del TLC con los EEUU, con la UE; ¿por qué no se ha hecho ningún debate nacional ni consulta sobre ellos? Las jornadas de protestas lideradas por las organizaciones sociales en el Catatumbo, dignidad cafetera, los paperos, lecheros, cebolleros, mineros, comunidades ancestrales, incluso sectores medios como los emputados, los estudiantes junto a la MANE, los profesores y trabajadores de la salud, lo que han evidenciado, es que la crisis es estructural.

Lo que más ha indignado es el abandono estatal por la corrupción, el engaño e incumplimiento de los acuerdos pactados, las amenazas y represión, que despertaron gran solidaridad en todo el país.

La competitividad desigual de mercados generada por las transnacionales es la causa fundamental de la quiebra de la pequeña empresa nacional y de toda la crisis del agro; no se concibe que tengamos que importar miles de toneladas de alimentos transgénicos para nuestra sobrevivencia, siendo un país agrícola y que nuestros productos no puedan salir al mercado, porque los importados son impuestos por los acuerdos del TLC a menos precio, pero con graves daños a la salud y preservación de nuestra especie.




Es muy cínica la reglamentación del gobierno al tener que imponer a nuestra comunidad campesina que deba comprar semillas certificadas de las transnacionales y que sea prohibida la semilla nacional. Estamos comiendo arepas con maíz de otros países y lo mismo la papa, el sancocho ya no es nacional; lo mismo ocurre con la ropa y los enseres de la casa.

Hay otros problemas más serios; el país no tiene la infraestructura para garantizar la viabilidad de la "locomotora", el transporte y salida de esa producción; de ahí, el desespero por construir y arreglar las carreteras, los terminales en puertos, aeropuertos, ampliación y construcción de nuevos oleoductos.

## Violación de los Derechos humanos

Colombia es un país donde el sector rural es escenario de múltiples confrontaciones y disputas violentas inherentes a un conflicto armado prolongado de carácter histórico y diverso; donde la vida comunitaria se ha visto reprimida por el actuar de estructuras estatales y paraestatales que cometen graves violaciones a los derechos humanos y que operan desde una lógica de las llamadas Bandas criminales, con el ejercicio de poder fáctico en territorios específicos. Del mismo modo, el actuar complejo del conflicto y la respuesta militar estatal no sólo coloca a las comunidades en un plano de vulnerabilidad humanitaria sino que ponen en entredicho la capacidad del Estado para garantizar el ejercicio de los derechos por parte de las comunidades.

La Corte Constitucional ha establecido que el conflicto armado colombiano debe ser entendido en sentido histórico y amplio. Lo anterior quiere decir que el conflicto no es solamente bélico sino también de carácter social e involucra una serie de intervenciones territoriales que guardan una relación de funcionalidad de estructuras paraestatales que cometen violaciones graves a los derechos humanos con carácter masivo y sistemático.

Un estudio sistemático de la zona de influencia de El Cerrejón en La Guajira, el área de mayor producción de carbón del país, concluye que "los resultados muestran una población en condiciones críticas de pobreza, medida tanto a través de acceso a bienes y servicios como mediante el índice de oportunidades humanas"; y desde el punto de vista de la salud "los resultados presentan vulnerabilidad y baja cobertura efectiva de servicios con limitada respuesta institucional".

Los municipios productores de oro en Antioquia se registran anualmente 96 muertes violentas por cada cien mil habitantes, 28 muertes de niños por cada mil nacidos vivos, 48 por ciento de la población con necesidades básicas insatisfechas (NBI) y 22 por ciento de la población en condiciones de miseria.

En el municipio de Montelíbano en Córdoba, único productor de níquel del país, se registran 79 muertes violentas al año por cada cien mil habitantes, 41 niños muertos por cada mil niños nacidos vivos, 45 por ciento de la población con NBI y 18 por ciento en condiciones de miseria.

Esta corresponsabilidad social de las empresas tiene como obligación que nadie tiene por qué correr más riesgos que los demás, y más aún, nadie tiene porqué sufrir daños sin que los agentes que usufructúan el daño reparen a estas personas y comunidades. En este sentido, las empresas mineras junto con el Estado comparten una



responsabilidad inherente a la posición de garantes que tienen frente a las comunidades, por asumir una actividad riesgosa de carácter humanitario, y ser cogeneradores del riesgo humanitario.

Según cifras de Funtraenergética (2011), "el 80 por ciento de las violaciones a los derechos humanos que ocurren en Colombia, se presentan en los municipios mineros-petroleros, que son el 35 por ciento del total nacional; el 87 por ciento del desplazamiento forzado sale de estos municipios y quienes reciben regalías por producción minero-energética; el 78 por ciento de los crímenes contra sindicalistas, 89 por ciento contra indígenas y 90 por ciento contra afro descendientes, se cometen en áreas minero-energéticas".

Se trata de 21 municipios que para 2010 equivalen a una tercera parte del territorio en proceso del plan de consolidación del gobierno, donde en forma paralela persisten, según Codhes (2011), múltiples formas de violencia política y social y graves violaciones a los derechos humanos y existen "minas de carbón, oro, plata, platino, ferroníquel, metales preciosos, materiales de construcción, caliza, arcilla, roca fosfórica y otros que se explotan, bien sea con importante inversión nacional o extranjera o de manera artesanal": Montelíbano, Santa Marta, Anorí, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Zaragoza, San Jacinto, El Tambo, Santander de Quilichao, Guapi, López de Micay, Timbiquí, Balboa, El Tambo, Istmina, Sipí, Barbacoas, Samaniego, Tibú, Chaparral y Buenaventura.

En el caso específico colombiano, las comunidades rurales, en especial, campesinas, indígenas y afro descendientes, se han caracterizado por expresar formas de movilización social encaminadas a obtener procesos descentralizados e incluso auto-sostenidos de democratización o autogestión. Las demandas de democratización política, a su vez, pueden expresarse como una de las razones por las cuales proyectos como el narco-paramilitar victimizan a las comunidades.

Solo enunciamos las grandes corrupciones administrativas y la impunidad sistemática de los sucesivos gobiernos; el abandono estatal de las inversiones sociales, el incremento desmesurado de la militarización y represión; la exclusión política y las desigualdades de las mayorías como causas del hambre y miseria, que son la esencia del conflicto social y armado que vive el país.

## Conclusiones y Propuestas

El modelo neoliberal impuesto por los países imperialistas a Colombia, en asocio con las clases gobernantes, es una de las causas fundamentales para generar la violencia social y política.

La lucha de las organizaciones sociales y políticas como nuevos sujetos activos ha protagonizado la exigencia de los cambios estructurales, que el país necesita para el logro de la democracia participativa y directa en la construcción de la paz con justicia social. En esa confrontación y lucha es que varias





transnacionales han tenido que salir del país o están cuestionadas por el daño social y ambiental, como Vale de capital brasilero, las multinacionales mineras canadienses Greyestar y Braewal Mining Corporation; la estadounidense Chiquita Brand, la Anglo Gold Ashanti inglesa y sudafricana, entre otras.

En términos generales, se puede señalar que las actividades mineras se están desarrollando en el país sin garantizar el derecho fundamental a la participación comunitaria, así como la de otras entidades del Estado, especialmente en el orden regional y local, desconociendo sus intereses y necesidades. Por regla general, las actividades mineras están vulnerando derechos fundamentales y colectivos, desconociendo procesos locales en lo ambiental, territorial, social y económico.

Las comunidades deben tener una participación activa y efectiva en las decisiones de las ventajas y desventajas de los proyectos. La consulta jamás puede ser la única comunicación entre el Estado y la comunidad. Por eso, es que el Ministro del Interior carece de los mecanismos para hacer la propuesta y reglamentarla. Socializar y discutir popularmente sobre el aumento a las multas, que duelan, controles ambientales a las transnacionales; investigar y sancionar a las que violen los DH.

Exigir las pólizas minero-ambientales con el alcance previsto en el nuevo Código de Minas, para que se garantice el cumplimiento de las obligaciones mineras y ambientales, lo cual debe conllevar a una situación de protección y el cumplimiento de las obligaciones ambientales, especialmente al momento del cierre minero.

En materia ambiental debe existir un mecanismo idóneo que garantice el cumplimiento efectivo por parte de las empresas de los términos, condiciones y obligaciones previstos en las licencias ambientales.

El Nuevo Código de Minas elaborado de manera popular debe incluir cambios significativos con respecto al medio ambiente, como la prohibición de actividades mineras en páramos, humedales y zonas protegidas, lo que ya ha generado molestias entre empresarios e inversionistas del sector.

Como ELN hemos manifestado que estamos en contra de la gran minería depredadora de las multinacionales, defendemos la pequeña minería artesanal que tiende a ser más ecológica; proponemos priorizar el intereses nacional y popular, que beneficie a las mayorías nacionales y no al capital extranjero; impulsamos la economía nacional y popular para el grueso de la población colombiana, la conservación de los recursos naturales y la protección del ambiente.

Proponemos hacer un consenso nacional sobre los recursos estratégicos, revisar los contratos de concesión y asociación con las transnacionales, y el sistema de regalías; hacer una planeación para el uso racional de los recursos y tener una reserva estratégica; ampliar la capacidad de refinación, desarrollar una escuela propia de la industria petroquímica.




# CAMILO: "Vencer, NO Solo Resistir"

"… Yo creo que la clase minoritaria generalizara contra todo el pueblo La guerra de exterminio que ya ha iniciado en algunas regiones del país, y creo en consecuencia que el Frente Unido debe prepararse, redoblando sus esfuerzos para poder resistir la embestida de la oligarquía. Y como lo que nos estamos proponiendo no es solamente resistir, sino vencer, y lo que queremos no es dejar tranquila a la oligarquía para que ella nos deje tranquilos con nuestra miseria, sino por el contrario, queremos decidir de una vez por todas nuestros destinos enfrentándonos a la minoría en lucha franca de todo el pueblo contra ella para disputarle el poder…"

Periódico del Frente Unido No 13. Noviembre 25 de 1965. Mensaje al Frente unido del pueblo, Camilo Torres Restrepo.

Ya han pasado casi 50 años de esta visionaria declaración, en los que como pueblo hemos sufrido esta embestida de la clase minoritaria:

1. La oligarquía, se ha organizada como Bloque Dominante, subalterna y con su ejército cipayo -del imperialismo, en cabeza de los Estados Unidos.

2. El país está lleno de Bases militares; lleno de militares gringos, la mayoría disfrazados de "contratistas" –además de la guerra contra el pueblo colombiano, fomentan la prostitución, el consumo de droga y el narcotráfico.

3. El país, es el "Israel de Suramérica", sirven de cabeza de playa, para que el ejército imperialista con sus aparatos de inteligencia –NSA-, y con hordas de mercenarios –organizados por los "contratistas", están prestos a invadir a Venezuela, Ecuador, y Brasil.

4. La oligarquía desde su componente terrateniente, tiene el acumulado de montar y utilizar ejércitos privados. Desde la década de los años 80, y referenciados a la política contrainsurgente, la oligarquía emergente, montó el "monstruo" del paramilitarismo. "Monstruo" que hoy se quiere devorar a la rancia oligarquía, ocasionándoles, más que una crisis de legitimidad, ya es de valores –o si no, miren el expediente de Álvaro Gómez, crisis, que hace metástasis en la crisis generalizada que venía profundizándose.

5. El Bloque Dominante, desde sus intereses, y para sus intereses, ha transitado, en un solo proceso (capitalismo como sistema mundial) por estos modelos: impulsar la industria desde el Estado (años 60 y 70), al modelo dictaminado por el FMI: El neoliberalismo (70 y 80). Al empezar los años 90, asumió el recetario del Consenso de Washington; A partir del 2001, vivimos el tsunami de la Transnacionalización y la Desnacionalización.



6. A partir de las comunicaciones, ha impulsado realidad virtual: crear contexto para ocultar, descalificar, apaciguar, y manipular; para posicionar la cultura de la "aldea global", pasando por encima de los valores y sentires de la diversidad cultural de nuestro pueblo-nación. Posicio-




naron y a alabaron la guerra mediática del establecimiento y la del narco-paramilitarismo… hoy no saben cómo bajarse del bus de la guerra como triunfadores y posando como gente de bien.

7. En Colombia la oligarquía ha construido a medias de acuerdo a sus intereses un estado-república, no ha logrado construir, plenamente, estado-nación. Ante lo cual, el proyecto de sociedad no representa los intereses de la sociedad y de la patria: económicos, culturales, sociales, y de identidad de Nuestramerica soberana.

Comandante Camilo, la semilla que sembraste, cuando expresaste que "nos estamos proponiendo no es solamente resistir, sino vencer", está más viva que nunca.

Ha sido un proceso duro, de avances y retrocesos, complejo, de renaceres como ave fénix. Pero pleno de satisfacciones y alegrías en medio de la guerra, en el que resaltamos:

8. La vitalidad del conflicto social, la persistencia y cualificación estratégicas de las insurgencias.

9. El protagonismo en las luchas del campesinado, de los indígenas y de los afrodescendientes, las luchas de las mujeres, la efervescencia del movimiento estudiantil, del sector salud.

10. El desarrollo del movimiento por la paz.

Comandante Camilo, estamos presentes y junto al pueblo, en sus luchas. Por un gobierno de nación, paz, y equidad, fieles a nuestra consigna de "ni un paso atrás… liberación o muerte".






M. Rubio / F.Int. Cte. Milton Hernández

# Europa: El Chantaje de la Pobreza

En Septiembre de este año, OXFAM – confederación de 17 organizaciones no gubernamentales que trabajan en más de 100 países contra la pobreza y la injusticia – público el Informe "La trampa de la austeridad", El verdadero coste de la desigualdad en Europa.

Según esta organización, las severas políticas de austeridad económicas aplicadas por la mayoría de los gobiernos europeos irán pronto debilitando las conquistas sociales del "Viejo Continente", creando además divisiones sociales y políticas dentro de los países, además de generar profunda pobreza sobre todo entre los sectores más desprotegidos, destinada a perdurar por generaciones.

Gracias a la imposición de políticas económicas anti-populares, se está hipotecando el futuro de millones de familias europeas y, desmantelado los más elementales mecanismos de protección social creados en los decenios para reducir la desigualdad social.

Asevera OXFAM que si las actuales medidas de austeridad seguirán vigentes, en el 2025 otros 25 millones de europeos caerán en la pobreza extrema.

En lugar de contrarrestar este fenómeno de la época, las criminales instituciones financieras europea, tras la aplicación de las recetas fondo-monetaristas, nunca descansaron en el propósito prioritario y descarado de preservar sus perverso sistema bancario. Conse-




cuencia de esto, y después de casi tres años de haberse radicalizado la crisis financiera en Europa, la deuda pública de los Estados miembros subió indiscriminadamente y, además del fracaso de las hipócritas políticas populistas, el drástico recorte del gasto público sigue aumentando por todo el continente especialmente en el sector de los servicios públicos como educación, sanidad y seguridad social.

Claramente estas medidas siguen perjudicando especialmente a lo más pobres y a los sectores sociales más vulnerables. Y si ya en el 2011, más de 120 millones de europeos vivían en la pobreza – el 24,3 por ciento de la población total del continente – en los próximos años casi un europeo de cada tres hundirá en la misma trágica condición, alcanzando los 146 millones de pobres; por ende la tendencia actual demuestra que los niveles de desigualdad de algunos países de Europa pronto se encontrarán entre los más elevados del mundo.

En los países que han aplicado radicales recortes del gasto (prácticamente todos), el valor real de los ingresos medios sigue cayendo desastrosamente, de modo que incluso quienes tienen empleo ahora se enfrentan a un futuro en el que serán más pobres de lo que fueron sus padres.

En ese contexto se ha reducido radicalmente el valor real de las ayudas sociales, imposibilitando a las familias hacer frente al desempleo y cubrir los costes de vida. Estos recortes se han traducido en la pérdida de una enorme cantidad de empleos y de servicios públicos básicos, deteriorando mecanismos fundamentales de seguridad social hasta el reconocimiento mismo de derechos fundamentales como la negociación colectiva y hundiendo estas sociedades en la pérdida de valores solidarios y dejando pista al racismo y a la xenofobia.

En el intento de reducir el déficit presupuestario de la administración pública, muchos gobiernos europeos, han adoptado draconianas medidas para privatizar los servicios públicos, mientras las grandes organizaciones financieras internacionales han presionado enormemente a Grecia, Portugal, España e Italia para que privaticen sus empresas públicas de energía, agua, transporte, hasta las instituciones sanitarias.

Emblemática la paradoja de Grecia donde, entre corrupción y leyes impopulares, el actual gobierno dio luz verde a la venta de alimentos caducados. Para mitigar la aplicación de las medidas impopulares a costa de lágrimas y sangre impuestas por la Troika europea, se permitirá a las grandes cadenas de supermercados despachar productos etiquetados, ya vencidos.

Pero, la estratégica aplicación de medidas de austeridad se viene manifestando también por medio de la liberalización del mercado laboral; flexibilizando la legislación laboral, creando y expandiendo la precarización laboral y reduciendo los derechos de los trabajadores; erosionando los sistemas de negociación colectiva y disminuyendo aún más la capacidad de los trabajadores para defender y garantizar los salarios mínimos.

En Europa, las tasas de desempleo, el de larga duración y el juvenil, están en sus niveles más altos desde el año 2000, a diciembre 2012, el 10,7 por ciento de la fuerza en capacidad de trabajo de los 507 millones de europeos.

En ese sentido con un total de 25,7 millones de desempleados no será fácil que la población adulta de este lado del mundo alcance las llamadas "condiciones de prosperidad" que vivieron algunos de sus padres.

Y las perspectivas no son de las mejores

Según lo que denuncia OXFAM en su Informe del pasado Septiembre, todas las previsiones indican que la mayoría de los

países europeos no volverán a crecer económicamente antes del 2015, mientras que solo para esperar de restaurar el nivel de vida de hace cinco años, necesitaran un mínimo de 25 años. Pues, en el mejor de los casos, en Europa, la cuna de la revolución industrial, del desarrollo y de la cultura, la miseria seguirá manteniéndose a la esquina por los próximos decenios.

Según el informe, el aumento de la pobreza entre la población ocupada en Europa seguirá implementándose por la drástica reducción de los salarios, el aumento de los impuestos y la evanescencia del poder de negociación colectiva, pese al sistemático aniquilamiento de los derechos laborales; causa también del elevado nivel de desempleo que seguirá excluyendo generaciones enteras, cuya situación en el mercado laboral tenderá a ser de permanente explotación y desventaja.

"La ausencia de sistemas sociales eficaces debilitará más a las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, tengan o no trabajo, y reducirá sus opciones de reconstruir sus medios de vida. La reducción de los servicios sociales, que suelen ser una fuente independiente de ingresos para los hogares, perjudicará especialmente a las mujeres. Los servicios públicos y las instituciones benéficas que proporcionan apoyo a las personas y las comunidades en épocas adversas tendrán menos recursos, o desaparecerán incluso, debido al aumento de la demanda y el descenso de la financiación."

"Los recortes en los servicios públicos ocasionarán la pérdida de millones de puestos de trabajo. Para aquellos que mantengan el empleo, los servicios públicos dejarán de atraer a los trabajadores más preparados, debido a la reducción de los salarios y el empeoramiento de las condiciones laborales. Indudablemente, la reducción de los presupuestos de sanidad y educación perpetuará la pobreza, ya que sólo quienes dispongan de recursos económicos podrán permitirse acceder a servicios de calidad. La falta de financiación pública para la educación superior agravará la desigualdad, ya que sólo los más ricos podrán permitirse pagar la educación necesaria para acceder a los empleos mejor remunerados."

Y sin tener en cuenta los elevados índices de evasión y elusión fiscal de las empresas y multinacionales, queda evidente que las medidas de austeridad – que azota fundamentalmente los sectores más populares del continente europeo – perpetuarán exclusivamente el poder y la riqueza de una elite minoritaria y seguirán despojando millones de jóvenes de sus oportunidades de futuro. Todas esas condiciones indican que en el futuro la "población europea vivirá en países profundamente divididos en el seno de una Europa dividida."

Pero, aun no se le puede restar más evidencia que la misma trágica realidad, el informe de Oxfam, no demora en señalar la profunda semejanza entre la aplicación y los nefastos resultados de las políticas de ajuste estructural impuestas en América Latina, el Este Asiático y África subsahariana entre las décadas de 1980 y 1990, con lo que se viene concretando hoy en día en Europa.

Tal como en el viejo continente ahora, estos países tuvieron que aceptar la adopción de la privatización, el recorte del gasto público, la nacionalización de la deuda privada, la reducción de los salarios para obtener ayudas financieras del FMI y del Banco Mundial, ampliando y hundiendo profundamente en el chantaje de la deuda.

En América Latina, como ya en Europa, el corte y las privatizaciones de servicios básicos como educación y salud excluyeron los más pobres, perjudicando fundamentalmente las mujeres.

Sin embargo, lo que ningún informe, raras ONG's y pocos sociólogos cuentan es que, de la ceniza y del abismo de la miseria con que el capitalismo intento arrodillar América Latina, nuevas esperanzas y fuerzas populares más conscientes y organizadas volvieron a renacer, mientras Europa sí, ahora tendrá que volver a recuperar su larga tradición de lucha y rebeldía para ponerse en las huellas de la revuelta permanente que sigue abonando América Latina.

Será que la auto determinación de los pueblos aún no está al orden del día, pero el camino aún se hace caminando. ¡Y sí, hay que caminar!


LN